

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D. C., veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

**MEDIDA CAUTELAR - ACCIÓN DE LESIVIDAD
EXPEDIENTE: 2021 00135**

COLPENSIONES VS JULIO ERNESTO CACERES NEIRA

Ingresa al Despacho la demanda interpuesta por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** en contra del señor **JULIO ERNESTO CACERES NEIRA**, para resolver sobre la **MEDIDA CAUTELAR** presentada por la apoderada de la parte actora.

I. ANTECEDENTES:

Medida Cautelar Solicitada: la apoderada de la parte actora sustentó la medida cautelar de carácter suspensivo contra los actos acusados en los siguientes términos:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2021, modificada por la Ley 2080 de 2021, y lo señalado por el Consejo de Estado.1 Solicito a su Despacho se declare la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución SUB No. 104163 del 30 de abril de 2019, proferida por la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, mediante la cual reconoció una pensión de vejez de carácter compartida a favor del señor JULIO ERNESTO CACERES NEIRA.

Atendiendo que se cumplen la totalidad de los requisitos para su decreto de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021

De acuerdo a la nueva liquidación, el valor que en derecho le corresponde al señor JULIO ERNESTO CACERES NEIRA, para el 1 de junio de 2016 (fecha de reconocimiento inicial) es la suma de \$4.335.332 y no como erradamente se reconoció en Resolución SUB No. 104163 del 30 de abril de 2019 por \$4.905.523.

Así las cosas, y encontrándose corregida la liquidación de la prestación se evidenció que el valor de la mesada pensional de vejez, corresponde al valor de \$5.193.273 para el periodo 2021 y no por valor de \$5.876.300, como viene percibiendo el demandado, generando una diferencia de 683.027 en cada mesada.

Finalmente, de persistir el efecto del acto administrativo, se seguirán pagando mesadas en proporciones a las que en derecho no corresponden, y muy difícilmente se podrán recuperar los dineros girados al demandado, causando con ello, graves y enormes perjuicios a la Entidad, afectando la estabilidad financiera del sistema general de pensiones.

Por lo anterior, solicitamos se declare la suspensión provisional, de los efectos jurídicos contenidos en la Resolución SUB No. 104163 del 30 de abril de 2019.”

Trámite de la Medida Cautelar: De la Medida cautelar se corrió traslado al señor JULIO ERNESTO CACERES NEIRA mediante auto del 23 de abril de 2021 por el término de cinco (5) días hábiles en aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., y ss. para lo cual se le realizó la notificación personal en su correo electrónico el día 28 de abril del año 2021. Culminado el término del traslado de la medida cautelar la accionada guardó silencio.

Para resolver se **CONSIDERA:**

De conformidad con el artículo 230 del C.P.A.C.A., las medidas cautelares dentro del proceso contencioso administrativo pueden ser de carácter; preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A., la cual se refieren a la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados y el respectivo restablecimiento del derecho. Sin embargo, para la adopción de dichas medidas se requiere del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma ibídem, la cual establece:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional

*de sus efectos procederá por **violación de las disposiciones invocadas** en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del **análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud**. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (...)*

Planteado lo anterior, se tiene que el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, condicionada a que el acto acusado contrarie de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, puesto que de requerirse un estudio de fondo, el juez debe agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte la sentencia.¹

Así, uno de los requisitos exigidos en la norma aludida, es la sustentación expresa de la petición, aspecto que fue ratificado por el Consejo de Estado inclusive desde antes de la expedición de la nueva codificación contenciosa administrativa, como se observa en providencia de enero 23 de 2003, Consejero Ponente Doctor Mario Alario Méndez, Referencia: expediente 3069, donde se especifica:

“(...)Entonces, para sustentar la solicitud de suspensión provisional, han de indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación, de modo expreso, como es la exigencia legal. Ello significa que para el efecto no es bastante la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación que se haga en la demanda como fundamento de sus pretensiones. No. La sustentación de la solicitud de suspensión provisional se repite, ha de hacerse de modo expreso, porque es exigencia legal.

Cabe señalar, sin embargo, como se ha explicado muchas veces, que el requisito de sustentar de modo expreso la solicitud de suspensión provisional se satisface con la remisión que se haga en la solicitud al capítulo de la demanda concerniente a las normas violadas y al concepto de la violación, criterio que en esta ocasión se reitera. Siendo, pues, que el demandante para el efecto se remitió a las normas legales citadas y al concepto de violación explicado en la demanda, debe entenderse cumplido el requisito legal(...)”²

¹ Consejo de Estado, Auto 21845 fe.7/2002 M.P. Alíer Eduardo Hernández Enríquez

² Consejo de Estado, sentencia del veintitrés (23) de enero de dos mil tres (2003), exp: 3069. M.P.: Mario Alario Méndez.

Bajo los presupuestos enunciados, se resolverá la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo de reconocimiento pensional del accionante. En primer lugar, la apoderada de la parte actora señala que debe declararse la suspensión provisional de la Resolución No. SUB No. 104163 del 30 de abril de 2019, al haberse expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse y con falsa motivación, sostiene que en el acto acusado se reconoció una pensión de vejez de carácter compartida en la que se evidencian inconsistencias en el ingreso base de cotización.

Sin embargo, en el presente caso el análisis de los actos administrativos demandados no desprende a simple vista y de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta una violación a normas superiores que ameriten el decreto de una medida previa; en efecto, al realizar el cotejo de las normas que se confrontan, regímenes de la Ley 33 de 1983, Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003., las pruebas aportadas y la sustentación de la medida cautelar no se puede extraer bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad que deba decretarse la medida cautelar solicitada.

Lo anterior, porque esta decisión requiere un estudio probatorio a fondo, en el cual el Juez agote el procedimiento y realice el respectivo juicio de ponderación en aras de establecer la validez de los actos acusados al momento en que se dicte sentencia. Especialmente a lo que respecta a la contabilización de semanas cotizadas reflejadas en la historia laboral del demandado con el fin de determinar el IBL aplicable al caso bajo estudio.

En este sentido y siendo que la medida cautelar solicitada no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 230 y 231 del C.P.A.C.A. EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

II. RESUELVE:

PRIMERO: SE NIEGA la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes de conformidad con lo establecido en el Artículo 205 del C.P.A.C.A en concordancia con lo establecido en los artículo 8 y 9 del Decreto Legislativo 806 del 2020, a los correos, paniaguacohenabogadossas@gmail.com, notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co iecaceresn@yahoo.com y en los correos oficiales de la entidad accionante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

cd